



El financiamiento público: una de las manzanas de la discordia electoral

Por Armando Reyes Vigueras

Uno de los temas más divisivos en la reforma electoral impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum es la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Esta propuesta no solo genera debate ciudadano, sino que ha provocado fricciones directas con los aliados estratégicos de Morena. El argumento central de la iniciativa busca resonar en la opinión pública bajo la premisa de que México sostiene las elecciones más costosas del mundo.

El objetivo es recortar los recursos que el Instituto Nacional Electoral (INE) destina a la operación partidista, montos que se disparan en periodos electorales. Para dimensionar las cifras, la autoridad electoral informó que en 2025 los partidos recibieron más de 7 mil millones de pesos (\$7,003,402,870), a los que se suman 210 millones adicionales por actividades específicas.

Bajo este esquema, Morena y el PAN concentran el grueso del presupuesto: Acción Nacional percibe poco más de 1,200 millones de pesos, mientras que el partido oficialista supera los 2,100 millo-

nes anuales. Ante tal disparidad, es comprensible que la ciudadanía apruebe un recorte; tan solo el año pasado, Morena manejó un presupuesto equivalente al de una secretaría de Estado. En su conjunto, el financiamiento a los partidos naciona-

les para 2025 iguala el presupuesto anual de dependencias como la Semarnat.

La resistencia de las cúpulas partidistas es previsible cuando se analizan los privilegios en juego: altos sueldos, onerosos gastos de representación y sedes nacionales con mobiliario de lujo. Sin embargo, el debate técnico es

más profundo y plantea una encrucijada peligrosa: ¿una disminución del dinero público abriría la puerta al financiamiento privado o, peor aún, a recursos del crimen organizado? ¿O es simplemente hora de que los institutos políticos adopten una austeridad real y abandonen sus excesos históricos?

Por ahora, la oposición más férrea no proviene del bloque opositor tradicional, sino de casa: el PT y el PVEM. Arturo Escobar, del Partido Verde, ya marcó territorio al señalar que, antes de recortar, debe revisarse el "piso parejo", proponiendo que todos los partidos reciban montos iguales para frenar la ventaja de Morena.

Sin los votos de estos aliados en las Cámaras, Morena no tiene camino propio. Por ello, el destino de la reforma no se decidirá en el tribunal de la opinión pública ni en el debate con especialistas, sino en la mesa de una negociación pragmática y costosa. La iniciativa ha colocado a la administración de Claudia Sheinbaum en una encrucijada irónica: para imponer la austeridad a sus rivales, primero deberá ceder ante la resistencia de sus socios, quienes hoy ven en el recorte de prerrogativas una amenaza a su propia supervivencia. Al final, el éxito de esta prioridad presidencial no dependerá de la retórica democrática, sino de qué tanto esté dispuesto el poder a negociar con quienes, desde sus propias filas, consideran que esta reforma es tan inoportuna como peligrosa.

• Mis redes: <https://linktr.ee/areyesvigueras>

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

Bajo este esquema, Morena y el PAN concentran el grueso del presupuesto: Acción Nacional percibe poco más de 1,200 millones de pesos, mientras que el partido oficialista supera los 2,100 millones anuales.